

Cataluña

Los presupuestos de 1992 ignoran la reforma educativa

Joan Caries Gallego

Virgili Burrel

Miembros del Secretariado de Enseñanza de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CC.OO.)

El gobierno de la Generalitat de Catalunya acostumbra a ofrecer pocos detalles sobre sus cuentas, liquidando el trámite de presentación de los presupuestos en pocas sesiones, valiéndose de su mayoría parlamentaria. El Departamento de Enseñanza, a su vez, evita la información y la discusión de sus grandes líneas presupuestarias con los interlocutores sociales, rehusando facilitar cualquier debate sobre la materia en el Consejo Escolar de Catalunya. Por otro lado, sus registros contables son crípticos y, además de los compromisos adquiridos con las patronales privadas, dejan un amplio margen de discrecionalidad a la administración en la asignación de partidas concretas. Tanta opacidad contrasta con el elevado volumen de recursos que gestiona Enseñanza, 304.673 millones de pesetas en 1992, más del 20 por 100 del presupuesto global de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de la importancia del presupuesto educativo, su crecimiento sobre 1991 es sólo del 18 por 100, reduciéndose al 11 por 100 si se excluyen las inversiones destinadas a Universidades, la partida que más crece. No se observa una voluntad clara de definir objetivos concretos de reforma en los niveles no universitarios, dejándose las inversiones en centros de primaria y secundaria en los niveles de 1991 y limitándose las partidas de personal a incrementos poco más que vegetativos. Se configura así un presupuesto de mantenimiento que parece ignorar las necesidades del sistema educativo catalán para abordar una reforma educativa de calidad. En cuanto a la enseñanza superior, el esfuerzo inversor no va más allá de facilitar la consolidación de la Universidad Pompeu Fabra y las llamadas Universidades provinciales, sin que se aprecien tampoco aquí líneas de mejora cualitativa de las Universidades catalanas. En suma, los presupuestos de 1992 reflejan que la enseñanza no es precisamente una prioridad del gobierno catalán, que prefiere dedicar su inversión preferente a la policía autonómica y a la construcción de nuevas prisiones.

Analizando de forma más pormenorizada las cifras dedicadas a Enseñanza, se observa la continuidad en la tendencia privatizadora del servicio educativo característica del gobierno de Convergència i Unió. Destaca la introducción de una partida de 100 millones para subvencionar obras de educación de los centros privados, respondiendo a las presiones patronales y asentando una dotación importante fuera de todo control. Por otro lado, se reducen en un 23 por 100 los gastos de funcionamiento de los jardines de infancia de la Generalitat -sólo 348 millones-, para dotar con una partida de 1.762 millones las subvenciones a la educación infantil privada, con un 22 por 100 de crecimiento.

En cuanto a los conciertos educativos, aumentan en un 8 por 100, para alcanzar la cifra de 46.440 millones, una cantidad muy estimable fuera de control y que se verá reforzada por el continuo recurso de las patronales privadas al cobro ilegal de cuotas.

En contrapartida, los presupuestos dedicados a la educación pública apenas se modifican. El gasto en funcionamiento de los centros públicos es sólo un 3 por 100 superior al de 1991, incremento a todas luces insuficiente si se han de dotar adecuadamente las nuevas aulas de tres años programadas y las continuas reclamaciones de colegios e institutos. Tampoco se aborda la conservación y reparación del parque escolar público, ya que con una partida congelada en 280 millones poco se puede hacer, y más teniendo en cuenta que diversos centros de primaria y secundaria están afectados de aluminosis y precisan mejoras estructurales. El capítulo de inversiones en centros de primaria y secundaria sólo aumenta un 11 por 100, insignificante para hacer frente a la masificación de los centros de secundaria y para acometer nuevas construcciones de centros de reforma.

En cuanto a la formación del profesorado, el aumento global es del 10 por 100, muy escaso, dedicando las partidas más importantes a formación en nuevos currículums y tecnología educativa, formación básica para la reforma y cursos de perfeccionamiento y postgrado.

Significativamente, las subvenciones a instituciones privadas para formación aumentan un 21 por 100. La partida más cuantiosa, formación para la reforma, sólo es de 200 millones, con los que el Departamento de Enseñanza pretende financiar cursos de 30 horas descentralizados, algo que difícilmente puede dar respuesta a las necesidades de formación existentes.

En el capítulo de personal, excepción hecha del notable aumento de plantillas en Universidades, destacan el estancamiento, el aumento del personal de confianza política y una cada vez más perfilada opción por las contrataciones de carácter temporal. Las retribuciones de los funcionarios docentes no universitarios recogen el pago de las 10.000 Ptas. del acuerdo con el Ministerio desde enero, 5.000 en octubre y el primer sexenio. Después de fijar la subida general anual en un 5 por 100, sólo queda un 4,7 por 100 de aumento para ampliaciones de plantilla, cifra ridícula que revela la renuncia a la generalización del aula de tres años, la introducción de los especialistas en primaria, la creación de los gabinetes de asesoramiento y orientación en secundaria, la reducción de ratios...

En conclusión, unos presupuestos continuistas tendentes a la privatización del servicio educativo, e insensibles a las demandas del profesorado y las medidas de calidad que la enseñanza catalana precisa para cometer la reforma educativa. El Departamento de Enseñanza de la Generalitat no parece disponer de mucha audiencia en el gobierno catalán y carece de voluntad para dar respuesta a los retos planteados.

Los presupuestos para 1992 no hacen sino abundar en los errores y las renuncias voluntariamente asumidas. Los compromisos políticos adquiridos con la amplia red clientelar de la escuela privada, la discrecionalidad en el gasto y la manifiesta incapacidad de gestión del Departamento de Enseñanza no harán sino introducir elementos de desviación y de derroche presupuestario. En suma, un año más, presupuestos que ignoran las necesidades educativas de Catalunya.